



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RADICADO: 110014189006 – 2022 – 00041 – 00
ACCIONANTE: OLGA YASMIN CIFUENTES GARCIA
ACCIONADO: EPS COOSALUD y las Vinculadas

JUZGADO SEXTO (6) CIVIL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA
(Acuerdo No. PCSJA18 – 11068)

Bogotá D.C., Dos (02) de febrero de dos mil veintidós (2022)

I.- ASUNTO A DECIDIR

Decide el despacho la acción de tutela promovida por OLGA YASMIN CIFUENTES GARCIA contra EPS COOSALUD y las Vinculadas (Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, ADRES, Hospital Universitario de La Samaritana, COCHLEAR), para lo cual cuenta con los siguientes:

II.- ANTECEDENTES

La señora Olga Yasmin Cifuentes García, solicita protección de su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas, la salud e integridad física, según los hechos que resumidos son:

2.1.- Narra en su escrito que padece HIPOACUSIA MIXTA SEVERA BILATERAL, es decir, alteración en su nivel de audición en ambos oídos, al punto que no logra percibir ningún sonido, lo cual afecta sus actividades diarias, entorno social y seguridad personal.

2.2.- En consulta médica, el pasado 6 de octubre de 2021, se le expidió la orden médica para solicitar el procedimiento e insumo del OIDO IZQUIERDO SISTEMA DE CONDUCCION OSEA TIPO OSIA 2.

2.3.- Informa que, desde dicha data a la presentación de la demanda de tutela, no ha sido posible su autorización y mucho menos el agendamiento para el procedimiento que requiere, razón por la cual se ve la necesidad de interponer la presente acción con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales.

III.- PRETENSIONES

El acápite demandatorio se contrae a solicitar se le tutelen los derechos fundamentales que considera vulnerados, ordenándosele a la entidad accionada que de forma inmediata:

“... se ordene y efectúe el IMPLANTACION DE IMPLANTACION DE OIDO IZQUIERDO SISTEMA DE CONDUCCION OSEA TIPO OSIA 2, con suma urgencia, ya que en la actualidad padezco de HIPOACUSIA MIXTA SEVERA BILATERAL ... y ... se ordene y autorice la rehabilitación integral de la dolencia que sufro, esto es, todos los procedimientos, medicamentos (accesorios necesarios para la prótesis) y/o terapias necesarias, que los médicos tratantes ordenen para aliviar mi dolencia de manera satisfactoria”

IV.- ACTUACIÓN

El 20 de enero de 2022 se admitió la acción de tutela, donde se requirió a la accionada EPS COOSALUD y las Vinculadas (Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, ADRES, Hospital Universitario de La Samaritana, COCHLEAR), disponiendo el enteramiento de la misma y se les concedió el término de dos (2) días para que ejercieran su derecho a la defensa., quienes notificados en debida forma, contestaron como pasa a resumirse:

4.1.- EPS COOSALUD: Indica:

“... en aras de garantizar a la señora OLGA YASMIN CIFUENTES, el acceso a los servicios de salud que requiere, emitió el día de hoy autorización para que se realice una IMPLANTACIÓN O SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVO DE CONDUCCIÓN ÓSEA - P209604, tal como se evidencia a continuación:

TERCERO: En los sucesivos, se estará enviando al despacho, como alcance de esta respuesta, la constancia de la programación de la cirugía para el procedimiento.

En este sentido nuestra entidad, está en total disposición de brindar el acceso al servicio público esencial de la salud, dentro un esquema de tratamiento lógico, científicamente comprobado, coherente, racional y pertinente definido tanto por las instituciones prestadoras tratantes y adscritas, como por los profesionales, por lo anterior se autorizará al paciente todas y cada una de las prestaciones de servicios de salud cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud.

Es pertinente manifestar al respetado despacho que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales y constitucionales de la usuaria, toda vez que hemos brindado el acceso a los servicios de salud que requiere el mismo de conformidad con nuestra competencia legal y reglamentaria atendiendo las disposiciones legales, por lo que es posible argüir no ha existido violación de los derechos fundamentales y constitucionales del acotado usuario.

Por último, he de comunicar que COOSALUD EPS siempre ha estado y seguirá dispuesto al cumplimiento de su deber legal, de autorizar procedimientos, exámenes, valoraciones médicas y especialistas que requiera la usuaria para el tratamiento y manejo de su patología y que se encuentre dentro del marco establecido en el plan de beneficios en salud de régimen subsidiado y que ordene el médico tratante que pertenezca a nuestra red de prestadores”

4.2.- MINISTERIO DE SALUD:

“... solicitamos respetuosamente exonerar al Ministerio de Salud y Protección Social, de toda responsabilidad que se le pueda llegar a endilgar dentro de la presente acción de tutela, no obstante, en caso de ésta prospere se conmine a la EPS a la adecuada prestación del servicio de salud conforme a sus obligaciones, siempre y cuando no se trate de un servicio excluido expresamente por esta Cartera, ya que como se explicó todos los servicios y tecnologías autorizados en el país por la autoridad competente deben ser garantizados por la EPS independientemente de la fuente de financiación, sin embargo, en el evento en que el despacho decida afectar recursos del SGSSS, solicitamos se vincule a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES.”

4.3.- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD: Refiere en su contestación falta de legitimación en la causa por pasiva y, por ende, procede su desvinculación, como quiera que la vulneración alegada no deviene de una acción u omisión atribuible a su entidad; de otra parte, que se debe tener en cuenta la prevalencia del concepto del médico tratante en los conflictos entre éste y la EPS accionada, más cuando por su conocimiento directo de la enfermedad, sus síntomas y formación profesional, es quien determina el procedimiento a seguir.

4.4.- ADRES,: Expresa:

“... De acuerdo con la normativa anteriormente expuesta, es función de la EPS, y no de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, la prestación de los servicios de salud, ni tampoco tiene funciones de inspección, vigilancia y control para sancionar a una EPS, por lo que la vulneración a derechos fundamentales se produciría por una omisión no atribuible a esta Entidad, situación que fundamenta una clara falta de legitimación en la causa por pasiva de esta Entidad.

Sin perjuicio de lo anterior, en atención al requerimiento de informe del H. Despacho, es preciso recordar que las EPS tienen la obligación de garantizar la prestación integral y oportuna del servicio de salud a sus afiliados, para lo cual pueden conformar libremente su red de prestadores, por lo que en ningún caso pueden dejar de garantizar la atención, ni retrasarla de tal forma que pongan en riesgo su vida o su salud, máxime cuando el sistema

de seguridad social en salud contempla varios mecanismos de financiación de los servicios, los cuales están plenamente garantizados a las EPS.”

4.5.- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA: Argumenta que sobre el presente asunto no existen razones fácticas ni jurídicas para concluir que dicho Hospital vulnere o amenace con vulnerar derechos fundamentales de la accionante, por lo que procede su desvinculación.

4.6.- COCHLEAR: Básicamente indica que:

“... Por medio de la presente me permito informarle que Cochlear Colombia S.A.S es una empresa líder en soluciones auditivas implantables a nivel mundial, nos dedicamos a darle el don de la audición a las personas que sufren hipoacusia moderada a profunda; actualmente hemos ayudado a más de 600.000 personas de todas las edades a llevar una vida plena y activa a través de la audición.

Dentro de nuestro portafolio de dispositivos se encuentran: los implantes cocleares (Nucleus, Kanso) y dispositivos de conducción ósea o sistema de conducción ósea (BAHA, Osia), los cuales se encuentra disponibles y a la venta para las entidades o personas que así lo requieran.

Con respecto al caso de la señora OLGA YASMIN CIFUENTES, nos permitimos informar que a la fecha no hemos recibido notificación de autorización por parte de la EPS o alguna entidad correspondiente para la prestación del servicio de programación del implante auditivo”

V.- CONSIDERACIONES

5.1.- Problema Jurídico

Corresponde a este estrado judicial establecer si realmente la entidad accionada y las vinculadas amenazan o vulneran actualmente los derechos fundamentales alegados por la accionante, al no prestarse el servicio médico requerido y que fuese ordenado por los galenos tratantes.

5.2.- Procedencia de acción de tutela, sustento normativo

La acción de tutela es un mecanismo previsto en la Constitución Política de 1991 que tiene como fin primordial la protección de los derechos fundamentales constitucionales en caso de amenaza o vulneración de los mismos por las autoridades públicas o los particulares, viabilizándose cuando no existe otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (artículo 86 de la Constitución Política y Decreto 2591 de 1991).

A su vez, la acción de tutela se encuentra revestida de las características de subsidiaridad e inmediatez, la primera porque sólo es viable, según lo establecido en el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución y 6 del decreto 2591 de 1.991, cuando el afectado no disponga de otros recursos o medios de defensa judicial y no, como instrumento de más o paralelo a lo que son las vías comunes por las que se deben someter las controversias judiciales, ni una tercera instancia; inmediata, porque no se trata de un proceso, sino de un procedimiento preferente y sumario.

Descendiendo al caso de marras, observa esta juzgadora el carácter de inmediatez, en la prestación del servicio médico para evitar vulneraciones a sus derechos, teniendo en cuenta las circunstancias de edad y de salud que soporta la paciente y, por ende, encuentra procedente la acción constitucional incoada.

5.3.- Del derecho fundamental de la Salud

Lo primero a mencionar es que la línea jurisprudencial presentada por la H. Corte Constitucional en relación al derecho a la salud ha ido evolucionando, a tal punto que hoy día, éste es considerado de estirpe autónoma fundamental y por su

íntima relación con la dignidad humana debe ser brindado sin importar cuál sea la persona que lo requiera.

Frente a esto señaló la jurisprudencia, que el servicio de salud debe estar sujeto al análisis de los principios contemplados en el artículo 49 de la Constitución Política en relación al derecho que aquí se discute, siendo éstos: eficiencia, universalidad y solidaridad del sistema general de salud. También ha dicho que el acceso al servicio de salud guarda estrecha relación con los principios de integralidad y continuidad, siendo aquellos orientadores de la seguridad social.

Por lo que en sentencia T – 760 de 2008 manifestó: *“cuando el acceso a un servicio de salud no es prestado oportunamente a una persona, puede conllevar además de un irrespeto a la salud por cuanto se le impide acceder en el momento que correspondía a un servicio de salud para poder recuperarse, una amenaza grave a la salud por cuanto la salud puede deteriorarse considerablemente.”*

Y como quiera que indicó que el derecho a la salud debe ser brindado en oportunidad, supuso ligarlo con los antes referidos principios de integralidad y continuidad orientadores de la seguridad social, los cuales definió así.

Con relación al análisis del principio de integralidad arguyó que debe ser *“... entendido como el deber que tienen las EPS de otorgar los procedimientos, tratamientos, medicamentos y seguimiento necesarios para mejorar el estado de salud de los usuarios del sistema, respetando los límites que regulan la prestación del servicio de salud”¹.*

De otra parte, refirió el principio de continuidad como aquel que *“conlleva a la ejecución de los procedimientos de forma ininterrumpida, constante y permanente, sin que sea aceptable su suspensión sin la justificación constitucional pertinente”².*

De lo hasta ahora expuesto se concluye que, siempre que se observe la omisión de alguno de los citados principios deberá el juez de tutela conceder el amparo solicitado, no hacerlo así, supondría la transgresión del derecho fundamental discutido.

5.4.- El caso concreto

Descendiendo al sub-lite, prontamente de los hechos expuestos en la demanda y contestaciones se advierte que:

1.- Conforme a las pruebas arrojadas, es claro que la accionante, por su padecimiento requiere de asistencia médica, que para el caso bajo estudio consiste en la implantación o sustitución del dispositivo de conducción ósea.

2.- Sobre dicho procedimiento, no es dable aceptar la respuesta de la EPS encartada después de tres meses de haberse ordenado el implante y como consecuencia de la presente acción constitucional, pretendiendo endilgar la responsabilidad a su red prestadora en relación con el agendamiento y realización del mismo, cuando lo cierto es que, es la EPS la entidad llamada a garantizar la prestación del servicio médico, por ser esta la razón de su existencia.

2.- El tratamiento fue ordenado por los galenos tratantes y vinculados a la accionada.

3.- No se evidencia que se halle fuera del POS hoy PBS.

Corolario de lo expuesto y sin mayor disquisición, advierte esta dependencia judicial que debe proteger los derechos reclamados y que se evidencia han sido conculcados a OLGA YASMIN CIFUENTES GARCIA, por lo que, se ordenará a la EPS COOSALUD, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia,

¹ .- Sentencia T-604 de 2008, T-1271 de 2008, T-053 de 2009.

² .- Sentencia T 654 de 2010.

AGENDE y posterior a ello, en un tiempo no mayor a quince (15) días lleve a cabo el procedimiento de implante en el oído izquierdo del Sistema de Conducción Ósea Tipo OSIA 2, como fuere ordenado por el galeno tratante, sin más contratiempos ni trabas administrativas para la usuaria.

Respecto al tratamiento integral, advierte el Despacho que no resulta viable emitir una orden indeterminada de servicios que no han sido prescritos por el médico tratante y que, por ende, no han sido negados por la entidad promotora de salud; sin perjuicio que EPS COOSALUD brinde una debida y oportuna atención integral al paciente en la medida y oportunidad que su médico tratante así lo considere y como así lo ha señalado la jurisprudencia, a modo de ejemplo, si fuere necesario realizar el mismo procedimiento en el oído derecho, en aras de permitir su desarrollo en sociedad y por respeto al derecho a la vida digna de la señora Olga Yasmin.

De otro lado, el despacho desvinculará de la presente acción a las demás entidades, por demostrarse que sobre las mismas no recae la responsabilidad de la prestación del servicio médico discutido.

VI.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SEXTO (6) CIVIL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTÁ**, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución; **RESUELVE**:

Primero.- AMPARAR el derecho fundamental a la salud de OLGA YASMIN CIFUENTES GARCIA, conforme el aparte considerativo de esta providencia.

Segundo.- ORDENAR a la EPS COOSALUD, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, AGENDE y posterior a ello, en un tiempo no mayor a quince (15) días lleve a cabo el procedimiento de implante en el oído izquierdo del Sistema de Conducción Ósea Tipo OSIA 2, como fuere ordenado por el galeno tratante, sin más contratiempos ni trabas administrativas para la usuaria.

Tercero.- DESVINCULAR al MINISTERIO DE SALUD, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, ADRES, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, COCHLEAR.

Cuarto.- NOTIFIQUESE a las partes la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- De no ser impugnado el presente fallo, REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ELIZABETH TOVAR RODRÍGUEZ
Juez

Firmado Por:

Elizabeth Tovar Rodriguez
Juez
Juzgado Pequeñas Causas
Juzgados 006 Pequeñas Causas Y Competencias Múltiples
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f40e8e7bb8511790f9cb6a12e4b201ef0ce8b1e3d2b4556099c0d11a8c9a788c**
Documento generado en 02/02/2022 12:50:24 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>